

22ª REUNION — 17ª SESION EXTRAORDINARIA — 21/22 DE MARZO DE 1984

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,

doctor VÍCTOR HIPÓLITO MARTÍNEZ

Secretarios: doctor ANTONIO J. MACRIS y doctor LEONARDO J. PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE y señor DESIDERIO L. ALMIRON

SENADORES PRESENTES:

ALMENDRA, Ramón A.
AMOEDO, Julio A.
ARAUJO, Ramón A.
BENÍTEZ, Alfredo L.
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
BRITOS, Oraldo N.
CASTRO, Jorge A.
CELLI, Felipe
CONCHEZ, Pedro A.
DE LA RÚA, Fernando
FALSONE, José A.
FERIS, Gabriel
GASS, Adolfo
GIL, Francisco
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
LAFERRIERE, Ricardo E.
LECONTE, Ricardo G.
LEÓN, Luis A.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARINI, Celestino A.

MARTIARENA, José H.
MATHUS ESCORIHUELA, Miguel A.
MAUHUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MURGUÍA, Edgardo P. V.
NAPOLI, Antonio O.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
RIVAS, Olijela del Valle
RODRIGUEZ SAA, Alberto J.
SAADI, Vicente L.
SALIM, Luis
SÁNCHEZ, Libardo N.
SIGAL, Humberto C.
SOLANA, Jorge D.
TRILLA, Juan
VELAZQUEZ, Héctor J.
VIDAL, Manuel D.
VILLADA, Francisco R.
WOODLEY, Kenneth W.

AUSENTES. CON AVISO:

BRAVO HERRERA, Horacio F.
SAPAG, Elías

SUMARIO

I. —Asuntos entrados:

- I. — Mensajes del Poder Ejecutivo por los que se solicitan acuerdos (Pág. 1020.)
- II. — Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 1020.)
- III. — Comunicación de la Presidencia del Honorable Senado (Pág. 1020.)
- IV. — Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 1020.)
- V. — Comunicaciones oficiales (Pág. 1023.)
- VI. — Dictámenes de comisiones. (Pág. 1023.)
- VII. — Peticiones particulares (Pág. 1023.)
- VIII. — Proyecto de ley de la señora senadora Rivas y otros señores senadores sobre erección de un monumento a la memoria de la señora María Eva Duarte de Perón (Pág. 1024.)
- IX. — Proyecto de comunicación del señor senador Murguía y otros señores senadores sobre establecimiento de un impuesto a los subproductos petroleros sujetos a retención para ser destinados a varias provincias patagónicas (Pág. 1025.)
- X. — Proyecto de comunicación del señor senador Vidal por el que se requiere subsidio para la construcción de la sede propia del Colegio Secundario de Ingeniero Guillermo Juárez en la provincia de Formosa. (Pág. 1027.)
- XI. — Proyecto de comunicación del señor senador Mathus Escorihuela sobre retiro de condecoraciones a oficiales no fallecidos con motivo de su actuación en la lucha contra la subversión y la guerra de las Malvinas. Retirado por el autor. (Pág. 1028.)
- XII. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Gómez Centurión y Gil por el que se piden informes sobre la situación actual de producción de empresa mineras del Estado. (Pág. 1029.)
- XIII. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Rivas y Araujo sobre trabajos de reparación del puente Lucas Córdoba sobre el río Salí en la provincia de Tucumán (Pág. 1030.)
- XIV. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Rivas y Araujo por el que se requiere ayuda económica a la provincia de Tucumán (Pág. 1030.)
- XV. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Martiarena y Benítez so-

bre provisión de dos helicópteros a la provincia de Jujuy. (Pág. 1031.)

- XVI. — Proyecto de resolución de los señores senadores Rodríguez Saá y Conchez sobre creación de una comisión especial para la instalación de un instituto de capacitación legislativa y divulgación parlamentaria. (Pág. 1032.)
- XVII. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Bittel y Villada sobre reforma de las cartas orgánicas del Banco Central, Banco de la Nación y Banco Nacional de Desarrollo. (Pág. 1032.)
- XVIII. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Bittel y Villada por el que se requiere prioritaria atención a los soldados que hayan participado en la guerra de las Malvinas. (Pág. 1033.)
- XIX. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Araujo y Rivas sobre creación y construcción de una escuela nacional de comercio y de un colegio nacional en Banda del Río Salí provincia de Tucumán (Pág. 1034.)
- XX. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Araujo y Rivas por el que se requiere el cumplimiento de un convenio sobre construcción de diversas escuelas de educación técnica en la provincia de Tucumán (Pág. 1034.)
- XXI. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Araujo y Rivas sobre emplazamiento de un monumento a la memoria de José Hernández en la ciudad de Buenos Aires (Pág. 1035.)
- XXII. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Benítez y Martiarena sobre construcción de un puente carretero sobre el río Grande en la provincia de Jujuy. (Pág. 1036.)
- XXIII. — Proyecto de comunicación del señor senador Castro por el que se requiere la declaración de zona de emergencia a la provincia de Santiago del Estero. (Página 1037.)
- XXIV. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Amoedo y Saadi sobre apoyo a la provincia de Catamarca para superar la situación creada por las intensas lluvias (Pág. 1037.)
- XXV. — Proyecto de comunicación del señor senador Celli y otros señores senadores sobre creación del profesorado de Educación Física en la Escuela Nacional de Comercio y Bachillerato, anexo de Leones Córdoba (Pág. 1038.)
- XXVI. — Proyecto de declaración de los señores senadores Sigal y de la Rúa sobre inclu-

sión de un representante provincial en los directorios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y de Gas del Estado. (Página 1038.)

XXVII.—Proyecto de comunicación de los señores senadores de la Rúa y Sigal por el que se solicita el mantenimiento de los vuelos directos entre Buenos Aires y Ushuaia. (Pág. 1039.)

XXVIII.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Gómez Centurión y Gil por el que se solicita la inclusión de la provincia de San Juan en el régimen establecido en los artículos 59 y 69 de la resolución 906 del Ministerio de Economía (reembolso adicional por exportaciones). (Pág. 1040.)

XXIX.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Sánchez y Menem por el que se requiere la inclusión en los planes de enseñanza del estudio de los derechos humanos. (Pág. 1040.)

XXX.—Proyecto de resolución de la Comisión de Relaciones Internacionales Parlamentarias sobre reglamento del Grupo Parlamentario Argentino de la Unión Interparlamentaria. (Pág. 1041.)

XXXI.—Proyecto de ley de los señores senadores Menem y Sánchez sobre creación del ballet folklórico nacional. (Pág. 1042.)

XXXII.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Araujo y Rivas sobre creación de una escuela nacional de educación técnica en Famaillá, provincia de Tucumán. (Pág. 1043.)

XXXIII.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Saadi y Amoedo por el que se solicita la reubicación de los trabajadores de la agencia noticiosa Saporti. (Pág. 1044.)

XXXIV.—Proyecto de declaración de los señores senadores Saadi y Amoedo sobre traslado al continente de los restos mortales de los soldados caídos en Malvinas. (Página 1044.)

XXXV.—Proyecto de ley del señor senador de la Rúa y otros señores senadores sobre protección a los indígenas y apoyo a las comunidades aborígenes (Pág. 1045.)

XXXVI.—Proyecto de comunicación del señor senador Britos sobre modificación del decreto 662/81 sobre personal incluido en convenios colectivos de trabajo. (Página 1050.)

2.—Homenaje a la memoria del doctor Joaquín V. González. (Pág. 1050.)

3.—Moción de preferencia del señor senador Mathus Escorihuela para considerar en la próxima sesión

el proyecto de ley en revisión sobre reconversión vitivinícola. Se aprueba. (Pág. 1055.)

4.—A pedido del señor senador Gómez Centurión se resuelve girar a la Comisión de Minería con recomendación de pronto despacho el proyecto de comunicación que figura en el punto XII de los asuntos entrados. (Pág. 1055.)

5.—Moción de preferencia solicitada por varios señores senadores para considerar en la próxima sesión los proyectos vinculados con la ayuda a provincias afectadas por inundaciones. Se aprueba. (Página 1055.)

6.—A pedido del señor senador Gómez Centurión se resuelve girar a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía con recomendación de pronto despacho el proyecto de comunicación que figura en el punto XXVIII de los asuntos entrados. (Pág. 1056.)

7.—A moción del señor senador Amoedo se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución que figura en el punto XXX de los asuntos entrados. (Pág. 1056.)

8.—Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Vivienda en el proyecto de ley en revisión sobre restablecimiento de las contribuciones a cargo de los empleadores y trabajadores autónomos con destino al Fondo Nacional de la Vivienda. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 1057.)

9.—Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley en revisión sobre normalización de las universidades nacionales. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 1081.)

10.—Moción de preferencia del señor senador Nápoli para considerar en la sesión del miércoles 28 de marzo el proyecto de ley en revisión de defensa de la democracia, con dictamen de comisión o sin él. Se rechaza. (Pág. 1101.)

11.—Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de comunicación del señor senador Berhongaray y otros señores senadores sobre ayuda a los pobladores de la localidad de Bernasconi, provincia de La Pampa. Se aprueba. (Pág. 1103.)

12.—Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Vivienda en el proyecto de comunicación de los señores senadores Trilla y Lafferrière sobre exención del IVA a la construcción y venta de viviendas económicas. Se aprueba. (Pág. 1103.)

13.—Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el proyecto de resolución del señor senador Vidal sobre plan de estudios, proyecto y obras para el manejo de las crecidas de los ríos Paraná y Paraguay. Se aprueba. (Pág. 1105.)

14.—Apéndice.

Sanciones del Honorable Senado (Pág. 1107.)

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley¹. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

9

NORMALIZACION DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley en revisión sobre normalización de las universidades nacionales.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Macris). — *(Lee):*

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación ha considerado el proyecto de ley en revisión, sobre la normalización de las universidades nacionales; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase como régimen provisorio de normalización de las universidades nacionales, hasta tanto se dicte la correspondiente ley de fondo, el establecido en el decreto 154/83, con las modificaciones establecidas en la presente ley.

La normalización a que se refiere este régimen se cumplirá en el plazo de un año, prorrogable por otro plazo no mayor de 180 días, si las circunstancias así lo hicieren necesario.

Art. 2º — Se restablece la vigencia de los estatutos que regían en las universidades nacionales al 29 de julio de 1966.

Art. 3º — Derógase la ley 22.207.

Art. 4º — El Poder Ejecutivo podrá intervenir las universidades nacionales por el tiempo que determine la presente ley y en los siguientes casos:

- a) Notorio incumplimiento de la presente ley;
- b) Riesgo inminente de alteración del orden público;
- c) Conflicto insoluble dentro de la universidad;
- d) Grave conflicto de competencia con los poderes del Estado.

Art. 5º — Al rector normalizador le corresponde:

- a) La representación de la universidad y el ejercicio de la jurisdicción superior universitaria;
- b) Convocar al Consejo Superior Provisorio a sesiones ordinarias o extraordinarias; presidir sus deliberaciones y ejecutar sus resoluciones;

- c) Ejercer la conducción administrativa económica y financiera de la universidad y supervisar la de las unidades académicas;
- d) Organizar la secretaría de la universidad y del rectorado; designar y remover a sus titulares, cuyos cargos serán docentes;
- e) Resolver cualquier cuestión urgente o grave, debiendo dar cuenta oportunamente al Consejo Superior Provisorio;
- f) Firmar los títulos, diplomas, distinciones y honores universitarios;
- g) Conducir las actividades académicas de la universidad;
- h) Designar y remover al personal cuyo nombramiento no corresponda a otros órganos, de acuerdo con los respectivos estatutos vigentes;
- i) Ejercer la jurisdicción disciplinaria;
- j) Ejercer las demás atribuciones que, de acuerdo con esta ley, le asigne el estatuto.

Art. 6º — Al Consejo Superior Provisorio corresponde:

- a) Establecer las modificaciones que se consideran necesarias a los estatutos universitarios puestos en vigencia, los que serán elevados a los fines de su aprobación al Ministerio de Educación y Justicia;
- b) Proponer al Ministerio de Educación y Justicia la creación, división, fusión o supresión de facultades o unidades académicas equivalentes;
- c) La suspensión o separación del rector, vicerrector o de los decanos por las causas previstas en el respectivo estatuto, en sesión especial convocada al efecto y por la mayoría de dos tercios de votos;
- d) Conocer en el caso de intervención a unidades académicas sobre el recurso de apelación que hubieran interpuesto las autoridades intervenidas, las que tendrán voz pero no voto, en la correspondiente sesión especial;
- e) Dictar su reglamento interno y aquellos reglamentos y ordenanzas necesarios para el régimen común de los estudios y disciplinas generales de la universidad;
- f) Orientar la gestión académica, homologar los planes de estudio y establecer normas generales de reválida;
- g) Proponer al Ministerio de Educación y Justicia la fijación y el alcance de los títulos y grados y, en su caso, las incumbencias profesionales de los títulos correspondientes a las carreras;
- h) Designar, a propuesta del decano normalizador respectivo, a los miembros del tribunal académico y a los jurados para los concursos;
- i) Aprobar, a propuesta del rector, el presupuesto de la universidad, sus ajustes y modificaciones, en los casos que corresponda, para su posterior elevación al Poder Ejecutivo nacional;
- j) Resolver las propuestas de nombramiento y remoción de profesores ordinarios y extraordinarios y decidir respecto de sus renunciaciones;
- k) Aceptar herencias, legados y donaciones.

¹ Ver el Apéndice.

Art. 7º — El decano normalizador tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Representar a la facultad o unidad académica equivalente;
- b) Presidir el Consejo Académico Normalizador Consultivo y convocarlo a sesiones ordinarias y extraordinarias;
- c) Ejercer la conducción administrativa, económica y financiera de la facultad con arreglo a los estatutos vigentes;
- d) Dirigir, coordinar, supervisar y orientar la actividad académica;
- e) Organizar las secretarías de la facultad; designar y remover a sus titulares y demás personal no docente, de acuerdo con los estatutos vigentes;
- f) Proponer al Consejo Superior Provisorio:

1. Los planes de estudio, la creación y supresión de carreras y doctorados y el alcance de los títulos;
2. El nombramiento y la remoción de profesores ordinarios y extraordinarios y decidir sobre la promoción de juicios académicos;
3. La designación de los miembros del tribunal académico y jurados para los concursos docentes;

- g) Aprobar los programas de estudio;
- h) Designar y remover a los profesores interinos, contratados y a docentes auxiliares;
- i) Adoptar las decisiones y medidas necesarias para la ejecución de las resoluciones emanadas del Consejo Superior Provisorio;
- j) Ejercer la jurisdicción disciplinaria;
- k) Presentar al Consejo Superior Provisorio el presupuesto anual de gastos, previa notificación al Consejo Académico Normalizador Consultivo;
- l) Determinar la época de exámenes, número de turnos y su respectivo orden;
- m) Resolver cualquier cuestión de carácter urgente y grave, debiendo informar posteriormente al Consejo Académico Normalizador Consultivo;
- n) Las que de acuerdo con la presente ley le asigna el estatuto vigente.

Art. 8º — Cada universidad asegurará la participación de los docentes en los consejos superiores provisorios.

Art. 9º — En la representación estudiantil ante los consejos se asegurará la participación de la minoría.

Art. 10. — Los concursos susanciados durante el gobierno de facto podrán ser impugnados a pedido de parte interesada, dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley.

Art. 11. — Dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley, cada universidad asegurará la existencia de un régimen de reincorporación que contemple la situación del personal docente y no docente cesanteadado, prescindiendo u obligado a renunciar por motivos políticos, gremiales o económicos, durante el gobierno de facto a partir del 24 de marzo de 1976, reconociendo los grados académicos al momento de las cesantías y

computándosele la antigüedad hasta el momento de su reincorporación, que no deberá exceder los noventa (90) días de promulgada la presente ley.

Art. 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. De acuerdo con el artículo 91 del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 8 de marzo de 1984.

Margarita Malharro de Torres. — Olijela del Valle Rivas. — Ricardo Emilio Lafferrière. — Francisco R. Villada. — Alberto J. Rodríguez Sáa. — Libardo Nicolás Sánchez. — José Alejandro Falsone. — Manuel D. Vidal. — Gabriel Feris.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(11 de enero de 1984)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase como régimen provisorio de normalización de las universidades nacionales, hasta tanto se dicte la correspondiente ley de fondo, el establecido en el decreto 154/83.

Art. 2º — Se restablece la vigencia de los estatutos que regían en las universidades nacionales al 29 de julio de 1966.

Art. 3º — Derógase la ley 22.207, manteniéndose provisoriamente las normas de sus artículos 7º, 43, 48, 51, 54 y 58, autorizándose a los consejos superiores provisorios a establecer las modificaciones que se consideren necesarias a los estatutos universitarios puestos en vigencia, los que serán elevados a los fines de su aprobación al Ministerio de Educación y Justicia.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

JUAN CARLOS PUGLIESE.
Carlos Bravo.

ANTECEDENTE

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1983.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo ha procedido al análisis de la ley 22.207 y ha considerado que resulta indispensable su derogación, atento a la necesidad de contar con un régimen provisorio de funcionamiento que permita alcanzar la autonomía de las universidades hasta tanto se dicte la respectiva ley universitaria.

La situación funcional de las universidades nacionales, sometidas al régimen autocrático de la ley 22.207 del 11 de abril de 1980, derogatoria del sancionado por el Congreso de la Nación en virtud de la ley 20.654 del año 1974, en cumplimiento de coincidencias programáticas concertadas entre los partidos políticos, determinó al Poder Ejecutivo a dictar el decreto 154/83 sobre normalización autónoma de dichas universidades.

Con el objeto de lograr esos fines normalizadores se recurrió al arbitrio del artículo 7º de la ley 22.207 sobre intervención de las universidades, designándose sólo rectores normalizadores, y atento a la facultad que se reconoce en dicha ley al Poder Ejecutivo nacional en el dictado definitivo de los estatutos (artículo 43 inciso a), se declaró transitoriamente la aplicación de los estatutos oportunamente sancionados por las respectivas asambleas universitarias vigentes hasta 1966, conforme al régimen autónomo de los decretos leyes 6.403/55, 10.775/56, 7.361/57 y 8.780/57.

El Poder Ejecutivo, si bien considera que el mencionado decreto 154/83 se ajusta a la norma del artículo 86, inciso 2), de la Constitución Nacional, conforme es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Fallos" 241; 384; 178:224; 182:244; 183:116, entre otros), encontrándose empero el Congreso Nacional en sesiones abiertas (artículo 86, incisos 11 y 12, de la Constitución Nacional) ha decidido someter a consideración de vuestra honorabilidad la medida adoptada.

En virtud de estas consideraciones y con el propósito de superar legislativamente las restricciones establecidas en la ley 22.207 o eventuales colisiones, que podrían afectar el proceso de normalización constitucional de las universidades nacionales, buscado por el dictado del decreto 154/83, el Poder Ejecutivo requiere de vuestra honorabilidad la derogación de la ley 22.207 mencionada y la aprobación del régimen transitorio establecido en dicho decreto, hasta tanto se sancione la nueva ley universitaria.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Justicia, elevará a consideración de vuestra honorabilidad el proyecto de ley, que establecerá la autonomía institucional de las universidades nacionales según es nuestra tradición, "mantenida —según expresiones de Nicolás Avellaneda al fundamentar el proyecto que se convirtió en ley 1.597 del año 1885— en las épocas más aciagas". "La autonomía —argumenta Avellaneda— es el carácter de todas las universidades y el verdadero y esencial carácter" (ver *Antecedentes parlamentarios de la ley 1.597*, en "ADLA", 1881-1888, página 167, nota 1010).

Por las razones y fundamentos expuestos, el Poder Ejecutivo solicita de vuestra honorabilidad la derogación de la ley 22.207 y el dictado de una ley que consagre el régimen provisorio de normalización de las universidades nacionales establecido en el decreto 154/83, a cuyo fin se remite el correspondiente anteproyecto de ley.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

RAÚL R. ALFONSÍN.

Carlos Ramón Santiago Alconada Aramburú.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase como régimen provisorio de normalización de las universidades nacionales, hasta tanto se dicte la correspondiente ley de fondo, el establecido en el decreto 154/83.

Art. 2º — Se restablece la vigencia de los estatutos universitarios aprobados por los decretos leyes 6.403/55, 10.775/56, 7.361/57 y 8.780/57.

Art. 3º — Derógase la ley 22.207, manteniéndose provisoriamente las normas de sus artículos 7º, 43, 48, 51, 54, 58; autorizándose a los consejos superiores provisorios a establecer las modificaciones que se consideren necesarias a los estatutos universitarios puestos en vigencia, los que serán elevados a los fines de su aprobación al Ministerio de Educación y Justicia.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Lafferrière. — Vamos a tratar a continuación un proyecto que, a pesar de no tener una gran difusión en las primeras planas de los diarios, sin embargo es trascendente para un importante sector de la sociedad argentina, que tiende a colocar a la universidad en una situación acorde con la actual realidad política que vive el país.

No vamos a tratar la propuesta de un partido ni una simple promesa electoral sino una ley constitutiva de una nueva manera de ver a la universidad, que ubicará nuevamente a la inteligencia de la Nación en forma adecuada con las necesidades políticas de la reconquistada soberanía del pueblo.

Señor presidente: hemos sufrido mucho —ha sufrido toda la Nación— durante estos años, pero indudablemente las universidades, con la gran lobotomía de la que ha sido víctima toda la sociedad argentina, han sentido mucho más los padecimientos, al ver coartadas sus posibilidades de libertad creadora. Porque las universidades pueden ser "enseñaderos" para la dependencia, o bien pueden constituir centros de investigación y protagonismo popular para una nueva forma de entender a la Nación, que es la vieja manera histórica de todos los tiempos.

Y la diferencia entre una y otra forma de universidad está representada en la autonomía y en la democracia interna de las casas de altos estudios. Y así rescatamos dos principios fundamentales:

La autonomía es necesaria para que las universidades no sean meras dependencias administrativas del poder nacional. Por otra parte, la democracia universitaria es útil a los efectos de institucionalizar el concepto de que el gobierno de estas casas de estudio debe radicar, fundamentalmente, en los estudiantes.

La universidad, señor presidente, no debe estar aislada del pueblo; al contrario, debe ser su avanzada intelectual e ideológica, debe ser una parte fundamental de la inteligencia de la

Nación. Por este motivo, no puede ser elitista sino que sus puertas tienen que estar abiertas a todos los amplios sectores populares.

Esta es una decisión irrevocable de todas las fuerzas políticas del país que, incluso, ha sido motivo en una de las sesiones pasadas de un proyecto de declaración del señor senador Rodríguez Saá por el que se solicita al Poder Ejecutivo la apertura de las casas de altos estudios a todos los estudiantes argentinos —iniciativa que seguramente tendrá el apoyo de todas las bancadas— para que no exista ningún argentino que esté en condiciones de ingresar a la universidad, por haber culminado su secundario, y no pueda hacerlo por cuestiones económicas o sociales.

Señor presidente: la universidad argentina ha protagonizado hechos importantes a través de la historia del país, pero podemos afirmar que ha sido durante un gobierno popular —el del doctor Hipólito Yrigoyen— cuando encarriló su destino en forma acorde con el de toda la Nación.

Fue en esas jornadas históricas de 1918 cuando, reclamando la democracia universitaria, los estudiantes argentinos levantaron banderas de unidad obrero-estudiantil, banderas de liberación latinoamericana, banderas de unidad popular en una gran confluencia del torrente emancipador, en todas sus vertientes sociales, que dio sustento a ese gran avance que significó para la Nación el primer gobierno popular, presidido por Hipólito Yrigoyen. Ese torrente emancipador que había nacido en los albores de la patria también ha tenido, señor presidente, altibajos, avances y retrocesos.

Hemos tenido épocas en las que, como esos grandes ríos que se dividen durante kilómetros para marchar separados pero en un mismo sentido, hemos sufrido desencuentros y hemos visto cómo distintos sectores de la Nación marchaban separados —a veces, enfrentándose—, pero en un mismo sentido, sabiendo que al final de la historia, allá a lo lejos, iban a confluir para empujar juntos hacia el destino de esta Argentina grande.

Hubo épocas en que este torrente emancipador se dividió en dos brazos, y es bueno que en este momento de unidad recordemos, para no reincidir en viejos errores, que el pueblo argentino sufrió durante varias décadas el dramatismo de enfrentamientos fraticidas. Por culpas de unos y de otros, esos brazos del torrente emancipador corrieron separados. En esta división, los estudiantes argentinos tomaron un carril que no era quizás el de los trabajadores argentinos. Y fue necesario que transcurrieran

años de sufrimiento en los que el país entero se revolvió en el dramatismo de la frustración y de la impotencia.

Fue necesario que llegara una de las dictaduras más negras de la historia argentina para que las calles del país sintieran ese sentimiento de unidad, en los finales de la década del '60, cuando para enfrentar a la dictadura de Onganía nuevamente aquellas banderas de unidad obrero-estudiantil se cristalizaron en una férrea lucha en común, que después se reflejaría en el abrazo de las cúpulas. Entonces vimos cómo aquellos estudiantes que peleaban en las universidades por recuperar su autonomía tenían en los sindicatos de los trabajadores las puertas abiertas para cobijarse de la represión y alimentar la militancia. Vimos cómo aquellos estudiantes que tenían las universidades tomadas por la policía y los centros destrozados podían recibir el apoyo de algún mimeógrafo para hacer volantes, o de algún local para hacer reuniones, o el que da la solidaridad humana que ayudaba a unir por abajo el esfuerzo de los argentinos para poder recuperar su dignidad y la vigencia de su soberanía.

Corrió sangre y hubo muertos. Aquí quizá deba rendir un homenaje a algunos sindicalistas y estudiantes que en aquellas épocas marcaron hitos. Puedo mencionar el ejemplo chico pero trascendente de aquellos secretarios generales que, en la ciudad de Santa Fe, en donde me tocó militar en esa época, nos abrían las puertas de sus gremios: Francisco Yacunizzi, del sindicato de la alimentación, peronista; José Sorbellini, del sindicato de la madera, militante del partido comunista y último candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe; o aquellas luchas de Antonio Scipione, que a nosotros, los radicales, nos recordaba la necesidad de incentivar nuestra comunicación con la clase trabajadora; o las de aquel otro sindicalista que recordamos con cariño y por encima de todas las diferencias ideológicas, pues significó en su momento la defensa irrestricta de los trabajadores argentinos con banderas de unidad: Agustín Tosco.

También quiero recordar, señor presidente, el símbolo que significó ver a Juan José Cabral, estudiante, peronista, caer asesinado en las calles de Corrientes y, al mismo tiempo, a Máximo Mena, obrero, radical, caer en las calles de su Córdoba; los dos fueron asesinados por balas disparadas por los mismos criminales.

Este fue el símbolo de la nueva Argentina, que debe tenernos a todos como protagonistas. Este fue el símbolo de un saldo de enfrentamientos, que en términos ideológicos quedaba superado.

No iba a haber, de ahí en adelante, ningún argentino, de ningún partido, que entendiera que la libertad y la democracia pueden ir separadas de la justicia, de la liberación y de la independencia. Todos los argentinos de todos los partidos entendieron que estas banderas forman parte del pensamiento nacional y del mismo torrente emancipador. Todos los argentinos de todos los partidos entendieron que, quizás ahora, la lucha lógica y justa dentro del campo popular debe darse en términos de cuál es el organismo político que canalice esta manera de pensar, pero nunca enfrentando estas banderas.

La universidad, señor presidente, tiene que adecuarse, entonces, a esta nueva forma de entender el país. Tenemos la meta de la universidad del futuro, de la universidad democrática, autónoma, pluralista, fraterna y abierta a todo tipo de idea, de investigación y de cauce del pensamiento. Tenemos la universidad del presente, destrozada, desmantelada, con persecuciones ideológicas y con censura, con compatriotas expulsados de sus filas, sean estudiantes, docentes o trabajadores. Y tenemos el gran desafío de partir de esta universidad para llegar a la otra. En el medio —quizás apuntando a la ley universitaria, que tendremos que debatir entre todos dentro de algún tiempo—, la urgencia de fijar pautas de normalización que vayan poniendo a la universidad argentina en el camino de recuperar su autonomía en plenitud, tenemos un régimen que, a su finalización, nos deberá poner en condiciones de exhibir ante el mundo la universidad ideal.

En consecuencia, debemos entender que esta ley de transición no aspira más que a ser un canal que lleve a la universidad de la dictadura a ser la universidad de la democracia y que, partiendo de la realidad que encontramos, nos permita operar de la mejor forma posible para hacer realidad la universidad abierta al pueblo y a su servicio.

Seguramente tendremos aquí algunas posiciones o enfoques diferentes en distintos aspectos parciales de la ley; pero tengo el orgullo de expresar ante el honorable cuerpo que después de un trabajo intenso realizado por los miembros de la comisión hemos podido ofrecer al pueblo de la Nación un despacho único, en general. Ello se debió fundamentalmente al tesón, al trabajo, al desinterés y al patriotismo puesto en la gestión de ese despacho por la presidenta de la comisión, senadora Malharro de Torres, y por la vicepresidenta de la misma, senadora Rivas, quienes sentaron las bases de un dictamen unificado que, seguramente, dará al país la mejor ley de normalización universitaria posible.

Hemos recurrido, señor presidente, a la base contenida en la sanción de la Cámara de Diputados. Pero la hemos enriquecido con aportes que fortalecen la autonomía de las universidades, que avanzan en las facultades de las casas de altos estudios durante el período de normalización, que abren las puertas a la representación de los docentes, que aseguran la representación de las minorías, del claustro estudiantil en el Consejo Superior y que, además, permiten cumplir con un deber que la sociedad en su conjunto tiene por los docentes y no docentes cesanteados, al establecer la obligación de su reincorporación cuando lo soliciten, en un plazo de noventa días y hasta tanto se realicen los concursos definitivos.

Señor presidente: estoy seguro de que todos estamos poniendo lo mejor de nosotros para legislar en función de la normalización institucional del país. Estoy seguro de que el patriotismo que nos anima tiene idénticos móviles, y de que así como hace poco, en aquella memorable sesión que nos encontró separados en la votación de la ley de normalización gremial, todos los senadores pugnaban por la democratización de los gremios, los veinticuatro que votaron en contra y los veintidós que lo hicimos a favor, también queremos hoy, con la satisfacción de haber logrado un despacho unánime, la democratización de la universidad argentina y la recuperación de su autonomía para ponerla al servicio de los grandes intereses nacionales.

Este patriotismo nos está colocando en la senda de los próceres y está fortaleciendo esa unidad nacional, esa gestión de todos en pos de la causa del género humano con la que soñaba San Martín, por la que es nuestro deber luchar y que estoy seguro de que está en las esperanzas de todos nosotros.

En nombre de la Comisión de Educación pido al honorable cuerpo el voto favorable en general para el proyecto que se está tratando. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Vidal. — Señor presidente, señores senadores: obvio sería resaltar la importancia del tema en debate. Una vez más, el Parlamento debe ocuparse, en el curso de la recurrente crisis argentina, de la reorganización de la universidad. Hoy venimos a derogar una ley, la 22.207, sancionada a contramano de los tiempos que vivimos por un régimen que al pretender el anti-histórico intento de achicar el país, al mismo tiempo debió redimensionar el sistema universitario para adecuarlo a las magras posibilidades del modelo en desenvolvimiento.

El limitacionismo universitario, la prohibición de la actividad de los centros de estudiantes, la aparente asepsia política e ideológica exigida a los directivos de las casas de altos estudios, los concursos amañados y extemporáneos y sobre todo la asfixia de la vida académica que requiere indispensablemente del oxígeno de la libertad, no fueron sino los correlatos de una empresa antinacional que en el plano económico destruyó la estructura productiva, en el político cercenó la libre expresión y el debate, en lo social redujo a un tercio de sus valores históricos el salario y atentó contra la organización gremial de trabajadores y empresarios.

Lógico es entonces que al restablecerse las instituciones se procure revertir el curso regresivo seguido por la orientación de la política universitaria, abriendo la instancia de un proceso reorganizador. Adelantamos, en consecuencia, nuestro voto favorable en general a la iniciativa en discusión pero al mismo tiempo queremos formular algunas precisiones acerca de nuestro enfoque, del enfoque desarrollista de la universidad y su inserción en el país, con la intención de clarificar un problema que a lo largo de los años no ha encontrado una respuesta efectiva.

No vamos a negar los positivos avances en materia de organización, libre debate y nivel académicos logrados por la universidad reformista. Pero queremos llamar la atención sobre un hecho altamente significativo. La reforma que procesó aquella universidad fue intrauniversitaria, hacia la universidad en sí, hacia la isla académica; no se proyectaba al país real. Los debates entre reformistas y humanistas y el cientificismo eran subproductos de la universidad aislada. Las carreras y los planes de estudio seguían siendo los tradicionales. Más del 70 por ciento de la demanda universitaria seguía concentrándose en las carreras tradicionales, en tanto que no existían alternativas en la oferta de estudios superiores, de especializaciones y disciplinas que apuntaran a la aplicación práctica de los conocimientos científicos y tecnológicos, en la esfera de la actividad productiva.

El reformismo se plantea la reforma de la universidad hacia adentro, pero de manera alguna piensa en un diseño de país que se proyecte a toda la geografía y haga posible el aprovechamiento pleno del rico inventario de riquezas naturales que posee la Argentina. La extensión universitaria y la alfabetización llevada a los barrios eran plausibles inquietudes de una juventud generosa, pero de ninguna manera instrumentos capaces de promover una transformación de fondo de la Argentina tradicional.

En 1958 se produce el intento más serio de modificar la estructura universitaria, con la ley de enseñanza libre, que tropezó en su momento con el cerrado muro de la incompreensión y los prejuicios que se sumaban a la agitación montada por los intereses golpistas. Hoy, señor presidente, los más importantes partidos políticos argentinos incluyen en su plataforma esta concepción de libertad de enseñanza. Y si traigo el tema a colación, no es para reavivar debates del pasado sino, principalmente, porque creo que hace falta aclarar conceptos en torno a esta revolucionaria innovación del gobierno desarrollista.

La universidad liberal, en sus diversas versiones, no había logrado superar los condicionamientos de su origen como cúpula educativa del sistema agroimportador. Hacía falta crear una nueva alternativa que, al tiempo que otorgara concreción al principio constitucional de la libre elección de la enseñanza, generara al costado de la universidad estatal una competencia activa protagonizada no sólo —como se interpretó erróneamente— por las confesiones religiosas, sino también por las organizaciones empresarias, sindicales y otras comunidades interesadas en la diversificación de la oferta educacional.

A fuer de sinceros, los desarrollistas entendemos como un triunfo de nuestras ideas el amplio consenso que hoy rodea a la enseñanza privada que, dicho sea de paso, en veinticinco años de trayectoria, no justificó ninguna de las aprensiones formuladas en su momento por sus críticos.

Debemos confesar, al mismo tiempo, que no estamos satisfechos. Muchas de las universidades privadas no hicieron sino duplicar las estructuras ya existente en la órbita estatal, con lo cual, en términos generales, el impulso transformador se vio frustrado en los hechos. Claro está que no puede dejar de tenerse en cuenta el hecho de que, a partir de 1962, el país careció, efectivamente, de una política de desarrollo, con lo cual faltó el principal estímulo para la diversificación a fondo de la oferta educativa.

Por todo ello, señor presidente, al dar mi voto favorable en general al despacho de la comisión, quiero señalar especialmente que éste debe ser el punto de partida de una revisión profunda de la universidad argentina.

El debate deberá rodear al dictado de la nueva ley de fondo y en él deberán participar activamente no sólo los integrantes de la comunidad universitaria sino todas las expresiones representativas de la realidad política y social del país, asumiendo el tema a partir de las dos necesidades impostergables de la hora: la inte-

gración y el desarrollo. Estas banderas, más allá de los lógicos disensos instrumentales, deben constituirse en el centro de un programa capaz de convocar a la unidad nacional y a la construcción de un vasto frente de liberación argentina.

Estamos dispuestos a luchar por el mantenimiento de principios esenciales como la libertad de cátedra, la libre expresión de las ideas, y por el sostenimiento de la función crítica, no conformista, que corresponde a la universidad en los días que corren.

Sostenemos, al mismo tiempo, que su papel en la grandiosa tarea de la reconstrucción argentina es vital. Debe ser el gran laboratorio de la transformación; sus estudios e investigaciones, por razón de la actual precariedad de recursos, deben concentrarse en disciplinas que favorezcan concretamente a la integración nacional. Debe tener como objetivo proporcionar a la comunidad los datos necesarios para el cambio, el acceso a estadios superiores de la vida productiva y, por ende, de la cultura.

Todo ello debe hacerse presidido por un criterio eminentemente práctico. De nada sirve preparar ingenieros o físicos para la navegación espacial, agrónomos teóricos que desconocen las realidades y condicionamientos de nuestro campo, abogados que no estudian los problemas cotidianos de la empresa y de la relación laboral, o economistas científicos atiborrados de modelos matemáticos e ineptos para confeccionar la programación y distribución de bienes en un país concreto.

La universidad, al servicio del país, tiene que preparar técnicos e investigadores para la modernización agraria y para el desenvolvimiento de las nuevas tecnologías agroindustriales, técnicos de diversos niveles que vayan al campo a desarrollar los más adelantados procedimientos en genética vegetal y animal, contribuyendo así a elevar la productividad para terminar con una descapitalización y pérdida de riquezas básicas que, por ejemplo, en la pampa húmeda, ha determinado la disminución en veinte centímetros de la capa de tierra fértil.

Esa universidad que queremos también tiene que preparar los técnicos e investigadores que requiere la expansión de la industria siderúrgica y de la petroquímica, como asimismo para el aprovechamiento de las riquezas naturales de las economías regionales y la explotación de la gran minería.

Se ha dicho más de una vez que la universidad argentina creó profesionales que se vieron forzados a emigrar ante la carencia de posibilidades prácticas. Lo importante hoy, más allá

de afirmar que los técnicos sobran en un país atrasado, es saber que ahora el país está obligado a desarrollarse y que la universidad debe prever ese desarrollo acompañándolo con alto nivel académico y práctico realismo.

Con estas consideraciones dejo fundado, como senador del Movimiento de Integración y Desarrollo, mi voto favorable en general al proyecto en discusión.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Señor presidente: este proyecto que llega hoy al recinto es el producto de largas semanas de marchas y contramarchas sobre el tema universitario. Hay un despacho común en este tema porque el oficialismo ha aceptado modificaciones sustanciales en el proyecto original del Poder Ejecutivo nacional y en la sanción de la Cámara de Diputados, y porque el justicialismo ha pospuesto algunas cuestiones fundamentales para la futura ley universitaria, que trataremos a corto plazo.

Para el justicialismo el problema universitario no es simplemente académico sino que se inscribe dentro de la lucha de la Nación Argentina por su definitiva liberación, dentro de la lucha contra los enemigos externos e internos, contra la oligarquía y contra el imperialismo, y dentro de la organización del movimiento nacional como insoslayable herramienta de la revolución en paz que nuestro país necesita.

Por ello, en el tratamiento de la cuestión universitaria hay por lo menos dos puntos de partida absolutamente claros y directrices para el justicialismo. Primero: se trata de construir una institución educativa superior al servicio de la Nación y que sea para felicidad de su pueblo. Segundo: se trata de resolver el problema de los estudios superiores en consonancia con el proyecto social de la comunidad solidaria y organizada. Por lo tanto, no nos conformamos con una universidad abierta al pueblo: tiene que ser directamente pueblo, trabajando organizada, con el mejor nivel académico, científico, tecnológico, para desarrollar las artes, las ciencias, las humanidades que necesitamos para la construcción y la liberación del país.

Esa universidad a la que aspiramos no está hecha, y tampoco contribuiremos a hacerla si nos detenemos en 1918, 1930, 1955. Hacer esa universidad nacional y popular es tarea prioritaria para nuestra patria. Dijo Juan Domingo Perón al inaugurar esa gran creación que significó para los trabajadores argentinos la Universidad Obrera Nacional, hoy denominada Universidad Tecnológica: "Lo que queremos en esta nueva Argentina es que la ciencia y la cultura

sean del pueblo y que el pueblo esté formado por hombres que amen a los hombres y no que preparen su destrucción o su desgracia".

Hacemos votos para que a ello contribuya la universidad argentina.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Debo reconocer la gentileza de los miembros de la Comisión de Educación, que me permitieron participar, en cierto modo y aunque fuera en última instancia, de sus preocupaciones por dotar al país de una ley de normalización universitaria que facilite el advenimiento de un régimen definitivo, que dé autonomía a las universidades y las proyecte hacia los destinos que todos deseamos para ellas.

Cuando el Poder Ejecutivo remitió este proyecto de ley nos encontramos con que había dictado el decreto 154/83 con el propósito de llegar a esa normalización universitaria. Aunque el mensaje del Poder Ejecutivo señala que el dictado de ese decreto estaba dentro de sus facultades constitucionales, deseo expresar un dispendimiento que es doctrinario.

Aun cuando el Poder Ejecutivo tiene todas las facultades reglamentarias en cuanto a la ley, lo que propuso con el decreto citado excede el marco indicado por la Constitución para dichas facultades. No voy a hacer de esto una cuestión fundamental porque el Poder Ejecutivo ha entendido que, a pesar de su convicción, debía someter a la aprobación del Parlamento argentino las disposiciones del decreto 154/83.

Lo señalo simplemente porque de allí deriva la justificación de por qué entendemos nosotros, al votar el despacho de la comisión, que estamos proveyendo a la universidad argentina de un sistema transitorio de normalización que, desde el punto de vista constitucional y legal, debe emanar del Congreso de la Nación.

La senadora Rivas ha descrito las marchas y contramarchas que hubo antes de llegar a la elaboración de este proyecto único que votaremos esta noche. Es lógico y razonable que así fuera.

Aunque el decreto 154/83 del presidente Alfonsín señala el propósito de enviar al Congreso un proyecto de ley universitaria definitiva, y a pesar de que destaque que la ley 20.654 fue el producto de las afinidades programáticas existentes entre radicales y peronistas antes de 1973, el proyecto del Poder Ejecutivo todavía no ha llegado al Congreso. Nosotros los peronistas creemos que el camino más acertado para encarar la normalización de las universidades, cerrado ya el ciclo sombrío de la dictadura, es restablecer la vigencia de la ley 20.654, dictada en 1974 en

virtud de las concordancias programáticas entre radicales y peronistas, como dije hace un momento, con una adecuación de normas para facilitar la transición del régimen de la dictadura al de la universidad democrática. No ha sucedido así, y queda en nuestro ánimo el anhelo de que al tratar el proyecto relativo a la ley universitaria definitiva se inspire su articulado en los términos de la ley 20.654, y que en lo posible se los mejore en oportunidad de su tratamiento por este Congreso, dentro de breve plazo.

El anuncio efectuado por el Poder Ejecutivo nacional de elevar el proyecto definitivo en esta materia nos inspira confianza; sin embargo, anunciamos la decisión de nuestro bloque de preparar un proyecto propio para que pueda ser considerado por las comisiones respectivas y debatido en este recinto cuando se inicie el período ordinario de sesiones.

No deseo detenerme a efectuar el análisis pormenorizado de las disposiciones del proyecto de ley que estamos considerando, pero no obstante tratarse de la discusión en general, estimo que es atinado formular algunas observaciones.

Desde luego, vamos a dictar un régimen provisorio de normalización de la universidad basado en el decreto 154/83. Hemos aceptado las normas del citado decreto no obstante que la posición peronista hubiera deseado que esta normalización se lleve a cabo a través de las disposiciones de la ley 20.654, por conciliar un criterio de orden práctico que permite ir adelantando en la tarea de la normalización universitaria.

Hay algunos puntos muy trascendentes en el decreto 154, que naturalmente han dado lugar a consideraciones muy especiales. Me refiero a la integración del Consejo Superior Provisorio que, presidido por el rector normalizador, va a gobernar la universidad en este período transitorio. Acerca de este particular, avanzamos sobre el propósito y la letra del decreto 154 al establecer que el Consejo Superior Provisorio no sólo se integrará con el rector normalizador, los decanos de las facultades y la representación estudiantil —tal como menciona el decreto—, sino con delegados del cuerpo de profesores y un delegado del personal remunerado no docente.

Para los peronistas es importante este tema porque siempre hemos sostenido la configuración cuatripartita del gobierno de la universidad, en el que se encuentran representadas las autoridades naturales, los profesores, los estudiantes y los no docentes. Podrá discreparse o no con esta concepción, y quizás cuando a menudo se pone sobre el tapete la discusión de este tema se hace mención a la representación de los graduados, pero nosotros consideramos con un sen-

tido práctico y debidamente representativo que los cuatro estamentos citados son los que deben tener representación.

En la comisión se ha conversado sobre este tema con bastante buena voluntad y se ha arribado a un régimen que permite que el Consejo Superior Provisorio esté integrado por el rector, los decanos, los representantes estudiantiles, delegados de los profesores y un delegado de los no docentes. Quería destacar este aspecto porque es un punto importante de nuestras condiciones en esta materia.

Otro tema muy importante para nosotros es el que se refiere a la evaluación de los concursos realizados durante la universidad de la dictadura. En este tópico quiero detenerme porque después de algunas discrepancias ocasionales, pero coincidiendo en el fondo de la cuestión, hemos llegado a una redacción que declara la nulidad de los concursos y establece la declaración en comisión de los profesores que resultaron designados en esos concursos del tiempo de la dictadura, hasta que sean ocupadas las cátedras por quienes obtengan el derecho a ejercerlas mediante los concursos y las reincorporaciones que la ley establece.

La breve historia de la realización de los concursos durante el gobierno de facto ha dado motivo a críticas y censuras de todos los sectores vinculados al quehacer universitario. No voy a hacer una enumeración detallada de los antecedentes que tengo sobre este punto, pero voy a destacar algunas de esas opiniones que son muy importantes en razón de quienes las han emitido y por la forma rotunda y terminante como se han expresado.

El Centro Argentino de Ingenieros, en el mes de septiembre de 1982, realizó una convocatoria para la reconstrucción intelectual y moral de la universidad argentina y produjo un documento en el que se formularon denuncias sobre hechos de persecución y menosprecio de la cultura, señalando la nulidad de los llamados a concursos para proveer cargos docentes en las universidades; se pidió en ese documento que los partidos políticos se comprometieran a rever todo lo actuado en materia universitaria y a solicitar la restitución en sus cargos de los docentes que hubiesen sido objeto de persecución y cesantía.

Cuando en este proyecto de ley que estamos tratando recogimos estas opiniones, nos sentimos reconfortados porque estábamos interpretando el pensamiento de gente vinculada a la vida universitaria que tuvo la preocupación, sin distinción de banderías políticas, de expresar su censura a los concursos de la universidad del tiempo de facto. Diré que son firmantes de esa

declaración personas como Ernesto Sábato, Adolfo Pérez Esquivel, Antonio Bedel, Guillermo Frugoni Rey, Héctor Negri, José Federico Westerkamp, entre otros nombres de una extensa nómina. Se trata de gente que tiene valía intelectual y prestigio universitario y que ha hecho ese tipo de manifestaciones, que son concordantes con lo expresado, entre otros, por el Colegio Médico de Córdoba, en noviembre de 1982, y por el cuerpo de docentes autorizados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el 20 de diciembre de 1982.

Los sectores estudiantiles, en lo referido a la anulación de los concursos, también han sido sumamente incisivos y muy firmes en la expresión de sus convicciones. Tengo aquí las declaraciones de dirigentes estudiantiles que señalaron su opinión sobre el tema. Por ejemplo, el joven Esteban Garlino, de Franja Morada, dijo al diario "La Nación" que la ley 22.207 estuvo signada por la arbitrariedad y el atropello y, por lo tanto, los concursos estaban viciados de nulidad en su fondo y en su forma. Agregó que la universidad debe jugar un papel preponderante en los cambios de la estructura social y debe lograrse su inserción definitiva en el marco de la democracia, y que sería incomprensible e incompatible que en esta época reparadora encarada por el gobierno los concursos realizados no fueran a sufrir variantes. Dijo ese estudiante que respetaba las decisiones del ministro de Educación, pero que tenía claro cuál era el mandato que había recibido del movimiento estudiantil y que iba a seguir expresando sus opiniones hasta la anulación de los concursos.

Estas expresiones de Franja Morada fueron compartidas por los estudiantes del sector intransigente, quienes por medio del estudiante Quinziano dijeron que los concursos debían ser anulados y que se trataba de una reivindicación latente del movimiento estudiantil, que aún no se había podido lograr. En el mismo sentido, el joven Dasso, de los estudiantes universitarios peronistas, con respecto al tema de los concursos proponía que se realizaran sobre la base de concurso público de oposición y antecedentes, en tanto y en cuanto los antecedentes indicaran el peso de los últimos siete años, durante los cuales los únicos participantes fueron los docentes del proceso.

Me detengo en el análisis del tema de los concursos porque creo que va a causar cierta conmoción en el ámbito universitario, desde el momento en que postulamos la anulación de todos los concursos y la declaración en comisión de quienes hubieren resultado favorecidos u ocupado las cátedras en virtud de ellos.

Pero hay que tener en cuenta que esos concursos realizados durante el gobierno de facto y en sus postrimerías tuvieron por objeto legar al próximo gobierno constitucional un hecho consumado: crear una universidad a espaldas del pueblo, con estructuras que fueran consideradas definitivas.

Los concursos se realizaron de tal manera que quedaron consagrados como profesores aquellas personas nombradas por los interventores militares a partir del 25 de marzo de 1976 para ocupar las cátedras vacantes. Y señalo esto porque entre las normas de reglamentación de los concursos era incluida como de relevante importancia la condición de que el candidato a la cátedra se hubiera desempeñado en el carácter de profesor ordinario o interino en la que fuera a ocupar.

Es decir que cuando se avasalló la universidad —penetrándose en ella luego del 24 de marzo de 1976 para tomarla y dominarla según el criterio de quienes estaban fundando la dictadura que soportamos durante tantos años—, se asignaron cátedras a personas que fueron seleccionadas de acuerdo con el criterio —ahora denominado “filosofía”— de quienes cometieron ese golpe de estado.

Entonces, estos individuos que manifestaban haber ejercido la cátedra en forma interina resultaban favorecidos en los concursos, ya que se consideraba de suma importancia esta circunstancia. Estas mismas personas, de acuerdo con la reglamentación, podían ser eximidas de las pruebas de oposición. Y es sabido en el ámbito universitario —es un hecho que todos conocemos— que en los concursos el requisito de antecedentes está siempre ubicado por debajo del de oposición. Las plataformas electorales de nuestros partidos establecen que en los concursos universitarios para la provisión de cátedras deberá darse mayor importancia al examen de oposición que al análisis de los antecedentes.

Por otra parte, el régimen del proceso establecía que los actos del concurso sólo podrían ser conocidos por los interesados directamente en él. Es decir que se había montado un aparato para escapar de la publicidad que, necesariamente, debía rodear a los concursos para la provisión de cátedras universitarias.

Más aún, el Consejo Académico tenía facultad para alterar el orden de méritos; de este modo, el concurso con prueba de oposición o sin ella resultaba supeditado a su arbitrio.

Existen otras disposiciones reglamentarias que viciaban completamente esta forma de realización de los concursos. He considerado conveniente puntualizar algunas para que cuando

nosotros votemos la anulación de esos concursos y declaremos en comisión a los profesores que en su virtud fueron designados, sepa el país que no actuamos con un criterio arbitrario ni una actitud vengativa, sino que lo hacemos porque existen motivos justificados para que el pueblo recele de las categorías profesoras que han ingresado en las universidades argentinas a través de procedimientos viciosos, que han sido censurados no solamente por los especialistas, no solamente por los partidos políticos, no solamente por la gente más destacada en el ámbito de la universidad nacional, sino también por las propias organizaciones estudiantiles de todos los sectores.

La otra situación que me interesaba puntualizar —y pido disculpas porque es una especie de anticipación del tratamiento en particular—, para que quede bien establecido el sentido y el propósito de nuestro voto, es la referida a la representación estudiantil.

El decreto 154 establece la conformación del Consejo Superior Provisorio y los consejos académicos consultivos con representación estudiantil, partiendo del reconocimiento de las elecciones que se han realizado por los estudiantes universitarios hace un año aproximadamente, de las cuales han surgido sus autoridades. Nosotros hemos entendido que, respetando el voto de los estudiantes para designar a sus delegados, para pacificar el ambiente estudiantil en las universidades y evitar la censura que diversos grupos más o menos politizados puedan dirigir contra quienes van a representar al sector estudiantil en el Consejo Superior y en los consejos directivos, debe haber una revalidación de la dirigencia estudiantil. Tanto es así que hemos pedido, y la comisión ha aceptado, que se establezca un sistema por el cual, dentro de 180 días —es un término bastante amplio—, las universidades convoquen a los estudiantes que tengan aprobado el primer año de sus carreras, o un número equivalente de materias, para que en votación obligatoria y secreta elijan a sus delegados para los cuerpos directivos de la universidad. Con ello, al cabo de este período los estudiantes habrán de revalidar o establecer las representaciones con las que deberá seguir manejándose en lo sucesivo la universidad.

En lo que respecta a los no docentes, hemos propuesto también, y se ha aceptado, que el representante por el personal remunerado no docente resulte elegido por una convocatoria que también se haga en cada universidad, para que ese personal elija su representación mediante el mismo procedimiento democrático de votación obligatoria y secreta.

Creemos que la conciliación alcanzada entre los bloques sobre puntos fundamentales de este sistema de transición hacia la universidad definitiva, sin alardes y sin elementos irritativos, crea las condiciones suficientes para que ella pueda encauzarse hacia el destino alto y trascendente que todas las categorías sociales del país le asignan.

Los peronistas vamos a votar este despacho, con las modificaciones concertadas dentro del seno de la comisión, con plena convicción de que vamos a servir al propósito de crear una circunstancia para que la universidad sirva realmente a los intereses comunes y totales del pueblo argentino.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — He escuchado con mucha atención la exposición del senador Martiarena. Ya se ha hecho referencia al trámite intenso que tuvo este proyecto. Desde hace más o menos dos meses estamos trabajando para obtener el dictamen de la Comisión de Educación que presido.

No deseo remitirme a las propuestas de la plataforma de mi partido que, el 31 de agosto de 1983, fueron aprobadas por la Convención Nacional, cuya Comisión de Educación tuve también el honor de presidir. Los aspectos que acaba de señalar el senador Martiarena están reunidos en ese texto.

Simplemente quiero decir que este despacho quizá pudo estar antes si estas propuestas de último momento se hubieran hecho en su oportunidad, a través de los senadores que representan al sector justicialista en la comisión.

Pero como bien lo ha dicho el señor senador Martiarena, y lo ha señalado mi colega, con la cual me integro especialmente, la señora senadora Rivas, hemos querido brindar un despacho unánime, de modo que no podemos llegar a la instancia de esta noche dando la imagen de hacer agregados sobre la marcha.

Quiero señalar, porque es justo que lo haga, que la comisión ha citado a estudiantes, al secretario de Estado y al ministro, y sus integrantes hemos conversado con todos los estamentos representativos de la universidad. Así, pudimos lograr un despacho que fue mejorando para dar una universidad organizada y para evitar —esto no lo digo con el ánimo de abrir un debate político sino con el sentido de que la historia nos refresque un poco la memoria— lo que en otras circunstancias ha ocurrido cuando después de algún gobierno de facto tuvo que autorizarse una ley que no era, precisamente, una norma para hacer una universidad democrática.

Por eso, este despacho, que ha avanzado sobre el decreto del Poder Ejecutivo, que dentro de la Comisión de Educación se ha enriquecido, es un dictamen que contiene la opinión y el pensamiento de cada uno de los sectores que integran esta Cámara. Quizás en algún aspecto particular exista algún grupo o sector que no esté absolutamente de acuerdo; pero puedo afirmar que este despacho intenta brindar a esta universidad un marco legal que la haga transitar brevemente, como dice la plataforma de mi partido, por el camino de su organización definitiva.

Yo acepto al señor senador Martiarena los conceptos que ha expresado —lamento que no haya hecho llegar su opinión a la comisión con anterioridad— y los comparto plenamente porque son las banderas de mi partido. La Unión Cívica Radical defiende la representación estudiantil y rechaza todo lo derivado de un facto, ya sea de gobiernos militares o de gobiernos no tan militares.

Aunque el señor senador Martiarena nos haya hecho llegar su opinión sobre la marcha, con todo respeto y en un tono cordial quiero agradecerle que se haya acordado de hacer estas sugerencias, que —reitero— las acepto, pero también tengo el deber moral de decir que son las banderas que defiende nuestro partido.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: me veo en el deber moral de hablar en este debate, porque fui dirigente estudiantil y ocupé cargos de responsabilidad en la Federación Universitaria del Litoral.

Tuve una vida al servicio de la causa de la reforma y fui un hombre que tuvo que estudiar trabajando, que no fue a la universidad como un regalón de la casa de sus padres sino como un hombre que empezó a trabajar muy temprano. El trabajo no me hizo dejar de ver la realidad y la lucha por una universidad nacional, al servicio del pueblo y que fuera la síntesis del hombre de la calle, del hombre que en primera y en última instancia construye la Nación todos los días.

A mí me tocó vivir una universidad distinta a la de estos días. Yo estuve en una universidad conflictiva, en la universidad del desencuentro. Ingresé en 1950, una época en que, como se dijo acá, no andábamos del brazo los que queríamos el mismo país; una época en que nos enfrentábamos los que en este momento queremos lograr la reconstrucción nacional. También nos enfrentamos en la universidad, y yo soy uno de aquellos que jugaron a cara o cruz por sus

ideas. Yo soy uno de los hombres que salieron como estudiantes a la calle para estar en contra de Perón. Lo hice con la misma lealtad y la misma franqueza con que me crié, conviví e hice de mi vida una escuela natural de tolerancia hacia mis amigos peronistas con los que crecimos en el mismo barrio, jugamos con la misma pelota y estudiamos con los mismos libros prestados, pero con los que estábamos enfrentados. No fuimos traidores a nuestras ideas; quizás pensáramos igual, pero nos habían puesto en caminos diferentes.

Por eso todos nos emocionamos cuando dos hombres que pertenecían a ejércitos civiles distintos y eran conductores de ideas que se enfrentaban, un día se abrazaron y lo hicieron con sinceridad, para recorrer el camino de la convivencia nacional.

Nosotros éramos los soldaditos de la universidad en discordia, aunque nos enfrentamos por muchas cosas que después nos hicieron andar abrazados. Y nos sirvió de mucho. Nos sirvió para aprender que hay fuerzas extrañas que a veces dividen a los hombres y que atentan no solamente contra lo que llamamos la economía nacional sino también contra la cultura nacional.

Yo recuerdo que en aquella universidad del enfrentamiento empezamos a hacernos amigos de los mismos que enfrentábamos, porque veíamos que teníamos problemas iguales. Recuerdo cuando los estudiantes salieron a gritar por Guatemala, contra la invasión de Castillo Armas y la caída del sistema de gobierno de Jacobo Arbenz. Me acuerdo de la universidad en que por primera vez los jóvenes peronistas y radicales nos encontramos del brazo pidiendo por los exámenes mensuales, y allí nos encontramos también con algunos que eran radicales y peronistas y que estaban en los claustros universitarios, con planteos distintos. Entonces, empezamos a caminar, aun en el desencuentro, guiados por aquella vieja idea de Ricardo Rojas de la restauración nacionalista, aunque le pusimos nombres distintos. Entonces empezamos a hacer la nueva hermandad entre todos los que veníamos de un origen común, que era el pueblo. Por entonces aparecieron los que hoy son los profesionales del justicialismo, que en esa época tenía pocos. Yo tuve de amigos, de compañeros —porque siempre seguimos siendo amigos, aun en el enfrentamiento—, a los hijos de los obreros que, por primera vez, entraban en la universidad argentina. Y fuimos abriendo sus puertas al pueblo, poco a poco, "pechándola" para hacerla más popular, más nacional, para ponerla al servicio de todos los intereses del pueblo.

De ahí salieron hombres de distintos colores políticos y diferentes ideas que surcaron el correspondiente camino; de allí también surgieron muchos de quienes murieron por la libertad, por la dignidad de la República, para que este país no fuera entregado. Y esos hombres fueron justicialistas, radicales, comunistas o demócratas cristianos. Como dije, salieron de esa universidad querida que pretendimos defender y que siempre, cíclicamente, la han roto, la han pisoteado los detractores del país y de la soberanía nacional que odian al pueblo, a nosotros, al hombre de carne y hueso; y ahí está hermanada la antipatria contra esa universidad.

Por todo eso hablo esta noche en nombre de todos mis compañeros —muchos de ellos están muertos—, de los que conocimos la cárcel, sin importar quién nos haya metido presos, sino que hoy estamos juntos. La coincidencia de esta noche es el triunfo del pueblo sobre la oligarquía, que siempre quiso tener una universidad al servicio de los vendepatria que, en la mesa de las negociaciones, han dejado la soberanía del país pedazo a pedazo, regalando la vida, el dinero y la hacienda de nuestra República.

Estoy contento porque es una noche de felicidad. Por sobre los defectos o errores formales o los aspectos sobre los que aún no estamos totalmente convencidos y que constan en este despacho único, hay una vocación libertaria, de unidad nacional; y esto constituye, quizá, un hecho trascendente, en este momento en que los mojigatos de la antipatria andan por la calle gritando y queriendo azuzar contra el gobierno de la Constitución que hemos jurado defender hasta la muerte.

Por eso hoy los justicialistas, los radicales y los partidos provinciales sellan definitivamente una concepción popular, una concepción nacional, una concepción de restauración nacionalista en favor de una cultura que jamás entregaremos, para poder tener una patria libre y poderosa al servicio del hombre, de ese hombre que, a pesar de sus cincuenta años, no pudo terminar la escuela primaria; para que en nuestro país no haya más analfabetos, para que la universidad llegue al rancho chico con hendiya grande, para que esa universidad, como el sol, entre a todas las casas; para que esa universidad, como el viento, nos pegue a todos y nos traiga el soplo vivificador de una nueva cultura al servicio del hombre argentino.

En nombre de todos esos muchachos que ahora tenemos cincuenta y tres años que militamos en partidos políticos diferentes, ya que algunos estamos en el radicalismo, otros en el justicialismo, en el socialismo, en la democracia cristiana

—algunos están muertos porque no pudieron escapar de la masacre que los dejó tendidos en el campo en donde están sepultados todos los hombres que quisieron ver libremente el sol de la patria— agradezco a todas las bancadas. Y en nombre de todos ellos he hablado esta noche, que es una de las noches del reencuentro, de los hombres que creyeron en la unidad obrero-estudiantil y de los que creyeron en la universidad latinoamericana al servicio de una cultura libertaria que defiende la soberanía nacional.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Amoedo. — Señor presidente: lejos de mi ánimo estaba intervenir en este debate, ilustrado a través de las exposiciones de los señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Esos mismos discursos traen a mi memoria, como en una pantalla animada, los años lejanos de mi juventud como dirigente estudiantil en el año 1936, y como presidente del Centro de Estudiantes de Buenos Aires, tras elecciones democráticas que constituyeron un jalón y una afirmación del derecho indiscutible de los estudiantes de compartir las responsabilidades académicas de las facultades que integran la Universidad de Buenos Aires y el resto de las universidades argentinas.

Aquí se han mencionado dos etapas de la universidad argentina. Pero debemos recordar la historia tradicional de la sapiencia, la dignidad y el honor que hicieron de las universidades de Buenos Aires y de Córdoba centros de estudios con claustros de profesores eminentes, que no fueron nombrados por teléfono o por decreto en arbitraria decisión del gobierno de turno. Bastaría enumerar a los hombres de la facultad en la que me gradué, la de Derecho, de la que egresé a los veinte años y a la que regresé como profesor de derecho constitucional, cargo obtenido en un concurso de oposición juntamente con los doctores Linares Quintana, Lafranco y Martín Aberg Cobo. En ese momento, señor presidente, eran miembros del claustro profesoral los más eminentes juristas argentinos.

También tuve el honor, imborrable para mi vida cívica, de defender en el Consejo Universitario a ese eminente argentino e indiscutido profesor de derecho penal que fue el doctor José Peco, al ser separado de su cátedra por el voto del claustro de profesores, en un acto político que no compartí como delegado estudiantil. Defendí así la presencia en ese claustro de un profesor y autor destacado que honró a las universidades de Buenos Aires y de La Plata.

Posteriormente, señor presidente, en ese largo recorrer de mi vida universitaria, me tocó tomar idéntica actitud cuando, por un acto inconsulto, el gobierno de la Revolución Libertadora expulsó de su seno a uno de los más grandes profesores de derecho político de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Faustino Legón.

Recorrí, señor presidente, todas las universidades del país aspirando a la presidencia de la Federación Universitaria, que logré gracias al voto de estudiantes y profesores que me permitieron ocupar tan alta posición en la dirigencia estudiantil.

Por eso, señor presidente, apruebo el dictamen y felicito a la Comisión de Educación, que procedió, en un acto de rehabilitación moral de la universidad a la que pertenecí, a la anulación de los concursos de profesores apañados, violando las más elementales normas de la ética profesional y universitaria, ya que durante un largo período de la vida universitaria se nombró arbitrariamente a profesores adictos al régimen de turno y que representaban, en casos que no quiero señalar particularmente, los grandes intereses de las multinacionales. Muchos de ellos fueron premiados no sólo con cátedras, que no obtuvieron por concurso, sino con cargos que ocupan todavía en el Servicio Exterior de la Nación, asumiendo así la representación excelsa de la República.

Por todas estas razones, señor presidente, para dejar en paz mi conciencia y —por qué no decirlo— con estos nostálgicos recuerdos, doy mi voto afirmativo al despacho que consideramos.

Es evidente que la dignidad de la República exige esta reparación y que de una vez por todas haya concursos de oposición libres, como ha dicho el señor senador por Jujuy. De esta manera se dignificará a la universidad y mereceremos el agradecimiento de la República y de las generaciones venideras.

Pido disculpas al Honorable Senado por esta improvisación, producto de la emoción, de los recuerdos que me embargan y de la vieja lucha en la defensa de una universidad democrática.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Marini. — En verdad, la mayor parte de mi vida política ha transcurrido en la lucha universitaria. Participé como dirigente estudiantil en un comienzo, luego como profesor universitario y finalmente como autoridad en una universidad. He obtenido allí las más grandes satisfacciones y he conocido también la cárcel con motivo de mi actuación y de mi lucha.

Pero no voy a continuar ahora con esos hechos sino que quiero referirme a este instante de uni-

dad nacional, en que los senadores de la Nación coincidimos en un proyecto de normalización de las universidades, en una síntesis magnífica de pensamiento, quedando allá lejos en la historia los enfrentamientos con proyectos distintos, que en alguna medida reflejaban nuestra incompreensión y un desconocimiento de las respectivas posiciones. Hacían falta el tiempo y las luchas para que realmente nos identificáramos y distinguiéramos a los verdaderos enemigos de la patria.

Es necesario que rescatemos un hecho que para mí fue enormemente trascendente e histórico. Quiero que quede constancia de ello en el Diario de Sesiones.

A quien les habla y a muchos otros jóvenes hijos de trabajadores les era prácticamente imposible acceder a la universidad y proseguir allí sus estudios. Si bien había libertad, pues nadie prohibía el ingreso a esa casa de estudios, nos era imposible por lo mucho que significaba para un hogar humilde costear una carrera universitaria, sobre todo a causa de los aranceles que regían entonces en la universidad.

Recuerdo, y quiero dejar constancia en este instante, que ingresé a la universidad en 1949. Durante el primer trimestre tuve que pagar aranceles. Para mi humilde hogar de entonces ello significó casi un sacrificio sobrehumano. Y lo que es peor, si uno tenía la desgracia de ser aplazado —aspecto usual en la carrera universitaria—, entonces tenía que pagar los aranceles duplicados o triplicados. De ese modo, el estudio se hacía imposible por esa barrera económica que se ponía al pobre para que no pudiera participar de la universidad.

En esos momentos se dictó una medida revolucionaria, sencilla, que nadie ha recordado en este debate: se trata de la norma dictada por el entonces presidente de la República, general Perón, que derogó todos los aranceles universitarios e implantó a partir de ese momento la gratuidad de la enseñanza universitaria, para que los hijos más humildes del pueblo argentino pudieran acceder al ciclo universitario sin ningún tipo de gravamen, de imposición, sólo con su propósito y buena voluntad de estudiar.

Debido a la disposición que acabo de comentar, muchos jóvenes provenientes de hogares humildes fueron mis compañeros y ahora tengo la satisfacción y el honor de compartir un título universitario con esos hijos de humildes trabajadores que ingresaron a la universidad.

Esos estudiantes también vieron facilitada su acción porque esa política fue acompañada con la apertura de comedores universitarios, residen-

cias universitarias, becas y una serie de ventajas que realmente permitieron que el pobre pudiera tener acceso a la universidad.

En este momento en el que todos estamos unidos espiritualmente y a punto de aprobar un proyecto que muestra la voluntad de llevar adelante la institución universitaria, el país y, definitivamente, la unidad nacional, deseaba dejar constancia de esta circunstancia histórica que no porque nadie la haya evocado deja de tener la enorme importancia de ser un hecho verdaderamente revolucionario, que abrió las puertas de la universidad para los humildes y que permitió que muchos hombres como el que habla puedan ostentar un título universitario.

Sr. Saadi. — Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Saadi. — Señor presidente: considero que el debate está agotado y por lo tanto solicito que se cierre y se pase a la votación del proyecto.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción de orden de cierre del debate formulada por el señor senador por Catamarca.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda cerrado el debate. Se va a votar en general.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: teniendo en cuenta que se introducen modificaciones en el texto de diversos artículos, solicito que se lea su texto para poder formular las proposiciones que corresponda.

Sr. Presidente. — Así se hará, señor senador.

—Se lee el artículo 1º.

Sra. Malharro de Torres. — Debe agregarse al final de este artículo la frase: "... a contar desde la vigencia de la presente ley".

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 1º con la modificación propuesta por la señora senadora por Mendoza.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 2º.

Sra. Rivas. — Debería agregarse al final la frase: "... en tanto sus disposiciones no se opongan a la presente ley".

Sra. Malharro de Torres. — La comisión acepta ese agregado.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 2º con la modificación propuesta por la señora senadora por Tucumán.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 3º.

Sra. Rivas. — El artículo 3º debería quedar redactado de la siguiente manera: "Derógase la ley de facto 22.207".

Sra. Malharro de Torres. — La comisión acepta esa modificación.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 3º con la modificación propuesta por la señora senadora por Tucumán.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 4º.

Sra. Rivas. — En el primer párrafo del artículo debería decirse: "El Poder Ejecutivo podrá intervenir las universidades nacionales durante el tiempo que determine la presente ley...".

Sra. Malharro de Torres. — La comisión acepta esa modificación.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 4º con la modificación propuesta por la señora senadora por Tucumán.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 5º.

—Se lee el inciso a) del artículo 6º.

Sr. Martiarena. — Para que concuerde con el resto, propongo que este inciso quede redactado así: "Establecer las modificaciones que se consideren necesarias a los estatutos universitarios puestos en vigencia para que concuerden con esta ley, los que serán elevados a los fines de su aprobación al Ministerio de Educación y Justicia".

Sra. Malharro de Torres. — El expresado no es el criterio que ha sostenido la comisión, porque el sentido filosófico de esta ley es recuperar la autonomía universitaria y no volver las decisiones ni de los consejos superiores ni de los consejos académicos a lo que establezca el Poder Ejecutivo. De manera que me atrevo a sostener que la comisión no va a aceptar la modificación que propone el señor senador Martiarena.

Sr. Presidente. — Se va a votar el inciso a) del artículo 6º tal como figura en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los incisos b), c), d), e), f), y g) del artículo 6º.

—Se lee el inciso h) del artículo 6º.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Para que su redacción se coordine con el resto del texto de la ley, propongo que este inciso establezca lo siguiente: "Designar, previa integración con los representantes de los profesores y estudiantes y, oportunamente, con el representante de los no docentes, a propuesta del decano normalizador respectivo, a los miembros del tribunal académico y a los jurados para los concursos".

Sra. Malharro de Torres. — Señor senador: tengo entendido que todo lo que se refiere a la sustanciación de los concursos y a quienes deciden sobre la elección de los jurados, es competencia del Consejo Superior Provisorio.

Con todo respeto le señalo que la participación de los no docentes, a la que usted ha hecho referencia, corresponde a otras instancias y a otro tipo de decisiones.

Sr. Martiarena. — Acepto la explicación de la señora presidenta de la comisión con respecto a los representantes de los no docentes, pero me permito insistir en la integración de los representantes de los profesores y de los estudiantes para la designación de los jurados para los concursos, hecho tradicional y normal en el régimen universitario.

Sra. Malharro de Torres. — Si me permite, señor senador, se trata de un problema reglamentario de los estatutos universitarios.

Sr. Martiarena. — Las expresiones de la señora presidenta de la comisión dan a entender que se procederá así en virtud de lo dispuesto en los reglamentos. Como ésta es la interpretación auténtica de la norma, retiro mi proposición.

Sra. Malharro de Torres. — En caso contrario, nos detendríamos en aspectos reglamentarios de la ley y no en su esencia.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso h) del artículo 6º.

La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los incisos i), j) y k) del artículo 6º.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 6º.

—Se leen los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 7º.

Sr. Amoedo. — Señor presidente: el inciso e) dice: "Organizar las secretarías de la facultad; designar y remover a sus titulares y demás personal no docente, de acuerdo con los estatutos vigentes". Entiendo que es una tradición el hecho de que los secretarios de la facultad —inclu-

so hay disposiciones anteriores— no pueden ser removidos exclusivamente por el decano sino por resolución del Consejo Académico.

Sra. Malharro de Torres. — Se está diciendo “de acuerdo con los estatutos”.

Sr. Amoedo. — Generalmente, los secretarios son elegidos por el Consejo Académico, y se necesita el acuerdo de éste para su destitución.

Sra. Malharro de Torres. — Volvemos al tema de los estatutos. El decreto 154/83 dice que cada universidad adoptará los estatutos del '66, con las modificaciones necesarias, pero vuelve a ser un aspecto reglamentario que estará contemplado en el estatuto que adopte cada universidad.

Podemos agregar: “. . . siempre que no se oponga a las disposiciones de la presente ley”, para satisfacer la inquietud del señor senador respecto de este inciso.

Sr. Amoedo. — Con esta disposición, derogáramos la que podría existir en el estatuto.

— Hablan varios señores senadores a la vez.

Sr. Presidente. — Se ruega a los señores senadores dirigirse a la Presidencia.

Sra. Rivas. — Señor presidente: creo que quedaría bien el inciso e) con el agregado sugerido por la señora presidenta de la comisión.

Sr. Presidente. — Por Secretaría, se continuará con la lectura del artículo.

— Se leen los incisos f), g), h), i), j), k), l), m) y n) del artículo 7º.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 7º con la modificación propuesta.

— La votación resulta afirmativa.

— Se lee el artículo 8º.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — Este artículo quedaría redactado de la siguiente forma: “Cada universidad asegurará la participación de los docentes en los consejos superiores provisorios, determinando su número y forma de elección por los respectivos claustros. La incorporación de los docentes designados se hará dentro de los sesenta días de promulgada esta ley”.

Sra. Malharro de Torres. — La comisión acepta la modificación de este artículo con la redacción propuesta por la señora senadora por Tucumán.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 8º con la modificación propuesta y aceptada por la comisión.

— La votación resulta afirmativa.

— Se lee el artículo 9º.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Feris. — Sugiero que se agregue el siguiente párrafo: “Los delegados deberán ser estudiantes de los dos últimos años de las respectivas carreras”. Esto tiene por finalidad que los delegados que resulten electos sean jóvenes con formación y suficiente conocimiento de la vida universitaria y que tengan capacidad para decidir.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente: la comisión ya había hecho un agregado al despacho original, aceptando la representación de la minoría. La comisión no acepta el agregado propuesto por el señor senador por Corrientes.

Sr. Amoedo. — Señor presidente: voy a apoyar la sugerencia propuesta por el señor senador por Corrientes. Se trata de una disposición que existe en el estatuto universitario, ya que los candidatos a delegados deben pertenecer a los dos últimos años de la respectiva carrera.

Sra. Rivas. — Propongo que el artículo quede redactado de la siguiente manera: “En la representación estudiantil ante los consejos se asegurará la participación de la minoría. Dentro de los ciento ochenta días de la promulgación de esta ley, cada universidad convocará a los alumnos que hayan aprobado el primer año de su carrera o un número equivalente de materias, para que elijan, por voto obligatorio y secreto, los delegados estudiantiles que se incorporarán al consejo superior y a los consejos académicos en reemplazo de los que se encuentren actuando en virtud de lo dispuesto por el decreto 154/83”.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente: hay dos propuestas. Una es la del texto original del despacho y la otra es la que realiza en este momento la señora senadora por Tucumán.

Sr. Presidente. — En realidad, hay tres propuestas: una es el artículo 9º en su redacción originaria, otra es el artículo 9º con el agregado propuesto por el señor senador por Corrientes y la tercera es el artículo 9º con la redacción propuesta por la señora senadora por Tucumán.

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: es para apoyar la redacción que propone la señora senadora Rivas y explicar que se trata de concretar en el texto lo que había anticipado en mi exposición cuando se consideró el proyecto en general.

Estamos de acuerdo en que la representación estudiantil contemple la participación de la minoría; pero queremos que en el plazo de ciento

ochenta días se realicen comicios estudiantiles de los que resulten los delegados que definitivamente se van a incorporar al consejo superior y a los consejos académicos, reemplazando a los actuales. El consejo superior organizará la elección de tal manera que voten los estudiantes que tengan aprobado el primer año de su carrera o, por lo menos, un número equivalente de materias, con lo cual creo que quedará satisfecha la inquietud del señor senador Feris en el sentido de que sean los estudiantes que ya tienen adquirida una responsabilidad en la vida universitaria.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Aquí se plantean dos problemas distintos. Primero, era el de las condiciones para elegir, y entonces se hablaba de que el alumno debía tener su primer año aprobado o, como dice el señor senador, un número determinado de materias. Pero, si no entendí mal, lo que propone el señor senador por Corrientes apunta a las condiciones para ser miembro del consejo, para ser elegido, y propone que lo sean los alumnos de los dos últimos años. En este punto yo me voy a permitir discrepar.

Efectivamente, creo que tenemos que remitir al estatuto universitario las condiciones para ser elegido, y que las mismas universidades lo reuelvan en ejercicio de su autonomía. De lo contrario, nosotros estamos discutiendo sobre condiciones de elegibilidad en la universidad en que estuvimos, y nos olvidamos de que hace más de veinte años que no pertenecemos a ella, que ahora hay gente que cuando tenía tercer año de facultad llenó las cárceles del país o ahora está en los cementerios como NN.

Tengamos, pues, un poco de criterio legislativo y hagamos las cosas con seriedad y sabiduría. Consagremos el derecho y el deber de votar para el estudiante que tiene el primer año aprobado, pero dejemos que las universidades determinen si para ser elegido debe tener tercero, cuarto o quinto año. No entremos en cosas peligrosas.

Lo que hoy queremos normalizar es una universidad que llenó las calles del país, nos guste o no, de muertos de dieciocho, diecinueve y veinte años. Esta universidad ha tenido presos, y los tiene todavía, por sentencias de tribunales militares y civiles. Es una universidad que rindió frutos, una universidad madura. El joven que actualmente ingresa a la universidad no es un inmaduro como pudo haber sido uno de nosotros. Esta es una juventud combativa y que ha ejercido el derecho del voto para elegirnos a nosotros. Es una juventud que a los dieciocho

años fue metida en un barco, llevada a las Malvinas y allí fue enterrada. ¿Y ahora le vamos a poner como condición para discutir un plan académico que solamente le falten dos años de su carrera?

Propongo, pues, concretamente, que fijemos las condiciones para votar pero que derivemos al estatuto universitario los requisitos para ser elegido. Recuerdo que hay otros requisitos establecidos, y aun hay causales de inhabilitación.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cass. — Hago moción para que el artículo quede redactado tal cual está, porque con todo respeto por lo que dice mi compañero de bancada, el señor senador Brasesco, entiendo que es contradictorio.

Es cierto que los estudiantes han llenado las cárceles y han muerto en las calles del país, pero con el mismo criterio tampoco habría que exigirles que tuvieran aprobado el primer año, porque para morir no hace falta eso. Entonces, tendrían el derecho de votar en el mismo momento en que ingresan a la universidad. Yo propongo, para no entrar en esa discusión, que el artículo 9º quede tal cual fue redactado por la comisión.

Sra. Malharro de Torres. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente: quiero expresar, no ya como presidenta de la comisión sino en mi carácter de senadora, que así como hemos sido tan celosos de no inmiscuirnos en la autonomía de los gremios, de la misma manera procederemos respecto de la autonomía de los jóvenes que tienen que decidir cómo organizarse y de qué forma deben participar. Desde ese punto de vista mantengo la redacción del artículo 9º.

Sr. Amoedo. — Las palabras vertidas por el señor senador por Entre Ríos demuestran la contradicción evidente respecto de la reforma que se pretende introducir. Por un lado, en la ley se establece que los estudiantes de primer año tienen el derecho a votar y que su voto es obligatorio, con lo que estoy totalmente de acuerdo...

Sr. Cass. — Eso no lo dice la ley.

Sr. Amoedo. — La ley no, sino la propuesta que se está discutiendo.

Por ese mismo criterio, no hay inconveniente en que se establezca la limitación propuesta por el señor senador por Corrientes, y esto lo fundamento teniendo en cuenta mi larga actuación en la universidad.

Es evidente —y las estadísticas lo demuestran— que los estudiantes, en gran proporción, abandonan la carrera en los primeros años, o cambian de especialidad. Pero, por otra parte, un alumno que se encuentra en los dos últimos años de sus estudios, independientemente de los conocimientos adquiridos y de la madurez que le otorgan los años, está habilitado para representar a sus compañeros en el claustro universitario.

Bien dice el señor senador por Entre Ríos que se trata de dos aspectos diferentes. Uno, se refiere al derecho de elegir y, el otro, es el de ser elegido. La prueba de ello reside en que la legislación electoral establece el voto universal pero las leyes reglamentarias determinan los requisitos de los que tienen que ocupar cargos electivos, como todos ustedes saben.

Esas son las razones —y la experiencia me lo demuestra— por las que los alumnos de primero o segundo año abandonan la carrera elegida, por causas que no es del caso discutir.

Con estas palabras dejo asentado mi apoyo a la propuesta formulada por el señor senador por Corrientes.

Sr. Presidente. — Corresponde votar, en primer término, el artículo 9º de acuerdo con su redacción original.

—La votación resulta negativa.

Sr. Presidente. — Se va a votar la segunda redacción, según el texto sugerido por el señor senador Feris.

Sr. Feris. — Propongo que se dé lectura por Secretaría.

Sr. Secretario (Macris). — (*Lee*):

Art. 9º — En la representación estudiantil ante los consejos, se asegurará la participación de la minoría. Los delegados deberán ser estudiantes de los dos últimos años de las respectivas carreras.

—La votación resulta negativa.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 9º con la reforma propuesta por la señora senadora Rivas.

Sr. Nápoli. — Propongo que se lea el artículo 9º, con la reforma correspondiente.

Sra. Rivas. — La redacción propuesta es la siguiente: "En la representación estudiantil ante los consejos se asegurará la participación de la minoría. Dentro de los 180 días de la promulgación de esta ley, cada universidad convocará a los alumnos que hayan aprobado el primer año de sus carreras o un número equivalente de materias, para que elijan, por voto obligato-

rio y secreto, los delegados estudiantiles que se incorporarán al consejo superior y a los consejos académicos en reemplazo de los que se encuentren actuando en virtud de lo dispuesto por el decreto 154/83".

Sr. Trilla. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. Trilla. — Opino que, en razón de las circunstancias por las que, a mi entender, algunos senadores votaron dos mociones distintas, que se efectuó nominalmente, a los efectos de que haya una sola votación para cada una de las mociones. A mi entender algunos señores senadores han votado en dos oportunidades dos mociones distintas. En consecuencia, para determinar cuál tiene mayoría de las tres mociones, propongo que se efectúe la votación en forma nominal.

Sra. Malharro de Torres. — Amablemente le sugiero al señor senador Feris que retire su moción, ya que finalmente el problema se va a solucionar con la reglamentación y la aplicación de los estatutos. Tratemos de obtener unanimidad.

Sr. Feris. — Señora presidente de la comisión: yo le solicito, por lo contrario, que usted adhiera... (*Risas y aplausos.*)

Sr. Presidente. — La Presidencia considera que se han votado las dos primeras propuestas.

En consideración el artículo 9º en su tercera redacción, propuesta por la señora senadora Rivas.

Sr. Lafferrière. — Creo que debe quedar establecido que los señores senadores que han votado ya por una de las redacciones no pueden votar nuevamente en este caso por otras. Es decir que aquí, señor presidente, se presentan cuatro posibilidades. La primera redacción, que es la de la comisión; la del agregado o la redacción que sugirió el señor senador Feris; la redacción que sugiere la señora senadora Rivas y la posibilidad de que ninguna de estas propuestas tenga la mayoría necesaria para convertirse en ley de la Nación por no ser aprobada por el Congreso. Es necesario tener conciencia de esto para evitar esa situación. Si votamos sucesivamente por cada una de estas opciones es necesario entonces que quede establecido con claridad que los señores senadores que votan por una no pueden votar por la otra, que la contradice, porque estarían alterando el sistema de mayorías.

Sr. Trilla. — Insisto, señor presidente, en que la votación se haga en forma nominal.

Sr. Amoedo. — No son propuestas contradictorias. La primera requiere el derecho a elegir. Lo que propone el señor senador por Corrien-

tes, y que yo apoyo, es el derecho a ser elegido. No hay contradicción. Si el Senado resuelve condicionar el derecho a elegir en la forma redactada por la señora senadora por Tucumán, no hay contradicción con lo que hemos sostenido. Hemos pretendido agregar una limitación o un condicionamiento para ser elegidos. Son dos cosas distintas, y creo que lo expresé claramente.

Sr. Lafferrière. — En ese caso deben integrarse las mociones en una sola, señor senador.

Sr. Martiarena. — Lo que ha manifestado el señor senador por Entre Ríos no es lo que corresponde. El señor senador Feris ha hecho una moción sobre una cuestión distinta. Esa moción no ha prosperado, tras lo cual tiene derecho a votar respecto del agregado que propone la señora senadora Rivas. De manera que no va a duplicar su voto; va a votar sobre una cuestión distinta. Estoy de acuerdo con el señor senador Trilla en que se haga la votación nominalmente.

Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, se va a proceder a la votación nominal.

Se va a votar en primer término el artículo 9º en su redacción original.

Sra. Rivas. — La redacción que propongo es la siguiente: "En la representación estudiantil ante los consejos se asegurará la participación de la minoría. Dentro de los 180 días de la promulgación de esta ley, cada universidad convocará a los alumnos que hayan aprobado el primer año de sus carreras o un número equivalente de materias, para que elijan, por voto obligatorio y secreto, a los delegados estudiantiles que se incorporarán al consejo superior y a los consejos académicos en reemplazo de los que se encuentren actuando en virtud de lo dispuesto por el decreto 154/83".

Sr. Gass. — Solicito que se pase a un breve cuarto intermedio en las bancas para aunar las propuestas.

Sr. Presidente. — Insistiendo en una reflexión que se hizo aquí, la Presidencia quiere advertir que se trata de dos situaciones distintas: una se refiere a quién vota y la otra a las calidades del delegado estudiantil.

La Presidencia sugiere que durante el cuarto intermedio en las bancas se compatibilicen las distintas posiciones, porque evidentemente el texto no está totalmente claro para los señores senadores.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de cuarto intermedio formulada por el señor senador por Buenos Aires.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Invito a los señores senadores a pasar a cuarto intermedio, permaneciendo en sus bancas.

—Así se hace.

—Son las 2 y 57 del jueves 22 de marzo de 1984.

—A las 3 y 5:

Sr. Presidente. — Continúa la sesión. Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente: durante este breve cuarto intermedio, la comisión ha resuelto mantener en este artículo el texto del dictamen original, sin perjuicio de que la señora senadora del bloque justicialista formule su propuesta y se pongan a votación las dos proposiciones.

Sr. Presidente. — Se va a votar nuevamente...

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Saadi. — Tengo entendido que el despacho de la comisión ha sido rechazado y no corresponde que se vote nuevamente, salvo en el supuesto de que se solicite reconsideración, moción que para ser aprobada requiere mayoría de dos tercios.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Deseo hacer notar al señor senador Saadi que en realidad el despacho original de la comisión no se llegó a votar. Se votó la propuesta del señor senador Feris...

Sr. Presidente. — No, señora senadora. La Presidencia entiende que también se votó el artículo 9º, de acuerdo con la redacción del dictamen de la comisión, y fue rechazado por el cuerpo.

Sr. Berhongaray. — Si me permite, señor presidente...

Entiendo que la decisión unánime de este cuerpo de pasar a cuarto intermedio ha sido con la intención de reconsiderar la votación. Por lo tanto, esa decisión no sólo mereció la mayoría de dos tercios sino que se adoptó por unanimidad, y tenía el sentido de reconsiderar la votación. De lo contrario, no hubiera tenido sentido el cuarto intermedio.

Por lo expuesto, solicito que se pase a votar el artículo 9º con el texto del despacho de la comisión.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Saadi. — No se formuló ninguna moción de reconsideración. Simplemente, se pidió pasar a un breve cuarto intermedio. En consecuencia, esa moción no puede tener otro sentido que el de pasar a cuarto intermedio.

Sr. Brasesco. — ¿Pero, entonces, para qué se pasó a un cuarto intermedio?

Sr. Saadi. — No se llegó a ningún entendimiento. El motivo no era para reconsiderar el texto del artículo del dictamen de la comisión sino para considerar las tres mociones que había sobre este asunto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — En el momento de efectuarse las votaciones, solicité a la Presidencia que se practicara votación nominal, pues advertía que ninguna de las proposiciones obtendría mayoría, teniendo en cuenta las expresiones de los señores senadores durante la discusión en particular de este artículo. El pedido de votación nominal obedecía también a que no existía claridad y transparencia con respecto a las votaciones efectuadas.

Por lo expuesto, señor presidente, reitero mi pedido anterior en el sentido de que se voten nominalmente las distintas mociones por cuanto no habían resultado claras las votaciones efectuadas en su momento.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Velázquez. — Supongo que esta confusión se debe producir por lo avanzado de la hora, pero creo coincidir con lo que acaba de manifestar el señor senador Saadi. Si no he entendido mal, y teniendo en cuenta que la comisión ha trabajado en forma seria y responsable, coincido con lo que expresó —según lo interpreté— de que se mantenga el despacho original.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Saadi. — La tesis sostenida aquí es que han sido rechazadas las tres mociones. Ello significa que el artículo no ha sido aprobado y en este momento no se puede redactar uno nuevo.

Sr. Presidente. — La Presidencia formula la siguiente aclaración: entiende que se votaron las dos primeras proposiciones pero no la tercera, pues en el momento en que se iba a votar la tercera propuesta se formuló el pedido de votación nominal. En consecuencia, las dos primeras proposiciones fueron votadas y no obtuvieron mayoría.

Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Entendía que el cuarto intermedio se había solicitado porque las votaciones no estaban claras, y tampoco existía claridad con relación a la tercera proposición que se iba a votar. Teniendo en cuenta la aclaración formulada, solicito entonces que se pase a votar la tercera proposición.

Sr. Presidente. — Eso es lo que corresponde a juicio de la Presidencia.

Sr. Sánchez. — Pero hay un pedido del señor senador Trilla de que se vote nominalmente, cuestión que todavía no se ha resuelto.

Sr. Presidente. — La Presidencia entiende que el cuerpo debe decidir si se vota nominalmente, dado que no han sido claras las votaciones efectuadas en el primero y en el segundo sentido, o si previamente se va a votar la tercera sugerencia.

Sr. Trilla. — Retiro mi moción de que se vote nominalmente, para evitar complicaciones.

Sr. Saadi. — Corresponde que se vote la tercera sugerencia; las otras dos ya se votaron.

Sr. Presidente. — Así lo entiende la Presidencia.

Se va a votar el artículo 9º con la modificación propuesta por la señora senadora por Tucumán.

Sr. Trilla. — Insisto, señor presidente, en que hay señores senadores que ya han votado por otras alternativas.

Sr. Presidente. — No, señor senador.

Se va a votar la sugerencia formulada en tercer término.

Sr. Trilla. — Vuelvo a insistir, señor presidente, en que se están votando mociones que ya fueron consideradas con anterioridad.

Sr. Presidente. — Se ruega a los señores senadores que estén por la afirmativa se sirvan expresarlo.

—Se vota y resulta negativa.

Sr. Britos. — Que por Secretaría se diga cuál fue el resultado.

Sr. Sánchez. — Que por Secretaría se dé el resultado de las tres votaciones.

Sr. Presidente. — La votación de la tercera sugerencia arrojó el siguiente resultado: 19 votos por la afirmativa y 21 por la negativa. En consecuencia, queda rechazada.

Sr. Saadi. — Por lo tanto, queda suprimido el artículo 9º del dictamen. No se puede ahora entrar a considerarlo.

Sr. Nápoli. — Exactamente.

Sr. Brasesco. — Es un verdadero disparate...

Sr. Gass. — Corresponde considerar el artículo 10, que pasa a ser 9º.

Sra. Malharro de Torres. — Señor presidente: por una razón de prolijidad en el trámite parlamentario, propongo que se lea primero el texto del artículo 10 que figura impreso en el despacho y luego, si hay agregados que hacer, que se haga mención de ellos.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura al artículo 10, que pasa a ser 9º.

—Se lee el artículo 10, que pasa a ser 9º.

Sr. Rivas. — Propongo otro texto, redactado así: "Decláranse nulos todos los concursos realizados desde el 24 de marzo de 1976 o los que estén en trámite. Los profesores designados a consecuencia de los mismos, quedarán en comisión hasta que se provean las cátedras con quienes corresponda, en virtud de los concursos que se realicen por aplicación de esta ley o por las reincorporaciones que la misma disponga".

Sra. Malharro de Torres. — La comisión mantiene la redacción del texto impreso y solicita que se someta a votación.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 10, que pasa a ser 9º, con la redacción originaria.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 11, que pasa a ser 10.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

Sra. Malharro de Torres. — Para sugerir que se suprima "a partir del 24 de marzo de 1976" y que en lugar de "los grados académicos" figure "categorías".

Sr. Saadi. — Estoy de acuerdo con lo señalado por la señora senadora, pero además propongo que se suprima "durante el gobierno de facto".

Sra. Malharro de Torres. — La comisión acepta la modificación porque es lo que habíamos convenido con el señor senador por Catamarca.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 11, que pasa a ser 10, con las modificaciones propuestas.

—La votación resulta afirmativa.

—El artículo 12, ahora 11, es de forma.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley¹. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

10

MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Nápoli. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

¹ Ver el Apéndice.

Sr. Nápoli. — Hago moción para que la sesión de mañana, jueves, pase al viernes a las 10. a efectos de considerar la ley de defensa de la democracia y los restantes dictámenes de comisión.

Sr. Martiarena. — Solicito que se me informe si el proyecto de ley de defensa de la democracia tiene dictamen de comisión.

Sr. Nápoli. — Todavía no, pero mañana se reunirá la comisión para elaborarlo.

Sr. Leconte. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Leconte. — Señor presidente: creo que esta ley es delicada y de mucha trascendencia para el futuro; por lo tanto, no debe ser considerada con este apresuramiento.

Todos quienes estamos aquí podemos tener una posición coincidente o discrepante, pero debemos realizar nuestra exposición con los fundamentos antecedentes y con el acopio de doctrina y experiencia que nos permita legislar con seriedad para este nuevo tiempo que tenemos la obligación de apuntalar.

Por los motivos expuestos, me opongo al tratamiento apresurado de una ley de esta trascendencia; de lo contrario, estaríamos contradiciendo la responsabilidad de la que ha hecho gala este cuerpo y que honra a la democracia argentina.

Sr. Nápoli. — Señor presidente: hace más de un mes que este proyecto tuvo entrada en la comisión y aún no ha sido tratado.

Sr. Feris. — Pero no formamos parte de las reuniones de la comisión.

Sr. Saadi. — Tal vez la palabra reflexiva del señor senador Leconte nos aconseja que mañana se reúna la comisión, pero que el tema quede para la subsiguiente sesión de la Cámara.

Sr. Brasesco. — Voy a sostener la moción de que nos reunamos el lunes para considerar este proyecto de ley. El hecho de que no se haya reunido la comisión formalmente no significa que los integrantes de ella no tengamos el proyecto en nuestro poder. En lo que respecta a la Comisión de Asuntos Constitucionales, por lo menos, es así. Inclusive nos hemos tomado el trabajo de estudiarlo y estamos en condiciones de discutir seriamente el problema.

Con toda sinceridad, creo que hay cosas que urgen, y si el viernes tenemos que quedarnos reunidos hasta el domingo, lo haremos.

No quiero polemizar con el colega senador Saadi. Creo que muchos senadores tienen el proyecto en su poder. Lo hemos leído y hemos hecho algunas consideraciones. Pienso que en